

MENSAJE N°

SAN JUAN,

**SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DR. MARCELO JORGE LIMA
S. / D.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de someter a consideración de esa Cámara el adjunto Proyecto de Ley, mediante la cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional N° 27.328, que establece el régimen de contratos de Participación Público Privada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 33 de la misma, que invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a dicho régimen.

Esta modalidad contractual regulada por la ley nacional citada, introduce un tipo de contrato de largo plazo, celebrado entre una entidad u organismo del Sector Público y sujetos privados o públicos, con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de la infraestructura, vivienda, actividades y servicio de diverso tipo, inversión productiva, investigación aplicada, innovación tecnológica, para proporcionar un bien o un servicio público, en el que la parte privada asume riesgos en la obtención del financiamiento y una responsabilidad en la gestión, al mismo tiempo que sus eventuales beneficios quedan vinculados a los resultados y desempeño del proyecto en cuestión.

En efecto, los contratos de Participación Público Privada, son una modalidad de relacionamiento entre los sectores públicos y privados crecientemente utilizada en el mundo y en nuestro país, que prevé que el privado, en asociación con el Estado, construya una obra y/o preste un servicio, obteniendo la financiación para llevar adelante un proyecto definido previamente y que el Estado o el mismo proyecto realicen el repago de la obra, con una utilidad razonable y en plazos largos (35 años, incluyendo prórrogas, de acuerdo al art.4, inc. d, de la Ley Nacional N° 27.328).

Se trata de propiciar, con la incorporación de este régimen, un nuevo esquema de asociación entre el Estado, como expresión de los intereses generales, y las empresas privadas, con sus capacidades técnicas y de acceso al financiamiento, para llevar adelante procesos de inversión, para la creación de infraestructura o la prestación de servicios, bajo un sistema que por su naturaleza propicia la transparencia en la adjudicación y en todas las etapas contractuales, poniendo incentivos, por las características mismas de la asociación Público Privada, para que los proyectos se concreten en los plazos acordados.

La iniciativa se inscribe en el marco de las políticas públicas activas, que asignan un rol preponderante a la creación de empleo genuino, como componente central del desarrollo sustentable desde lo ambiental, diversificado y de largo alcance de la Provincia y de todas las actividades productivas y de servicios involucradas.

Asimismo, es sabido que, para avanzar en el logro de esos objetivos, la creación y/o mejora de la infraestructura requerida es una condición imprescindible. Pero, también es conocido que el financiamiento de los emprendimientos requeridos para lograr esos objetivos no siempre se encuentra disponible, con los recursos con los que cuenta el Estado Provincial o con los mecanismos financieros públicos, nacionales, internacionales o multilaterales tradicionales disponibles.

Por ello se entiende que los contratos de Participación Público Privada, regulados por la ley a la que se propicia la adhesión, en tanto aportan otras fuentes de financiamiento y novedosas formas de gestión, pueden constituir una herramienta, alternativa y/o complementaria a las existentes, previstas por la ley 128-A, para la contratación y gestión de obras y servicios públicos, para de esa manera potenciar los procesos de inversión, permitiendo ampliar y/o mejorar la infraestructura disponible en la Provincia y así seguir avanzando en la concreción de los objetivos propuestos.

Con esta adhesión se propone poner a disposición de las diversas áreas de Gobierno, de los actores privados de la Provincia y de quienes se interesen en invertir en San Juan, las herramientas contractuales y de gestión prevista en el marco regulatorio general del sistema Participación Público Privada, establecido en la Ley Nacional N° 27.328, a la que se propicia adherir.

Para la gestión de estas herramientas desde el Gobierno Provincial el proyecto elevado prevé contar con una instancia ejecutiva, mediante la creación de una unidad específica o la asignación de esas funciones a una unidad organizacional existente. La que tendrá a su cargo la centralización normativa de los contratos regidos por esta ley y el apoyo operativo, consultivo y técnico de las unidades de Estado contratantes, en todas las etapas de los proyectos.

Asimismo prevé otra instancia con la participación de las distintas áreas del Gobierno, mediante la creación de un Comité Consultivo Interministerial, integrado por los Ministerios de Hacienda y Finanzas, de Infraestructura y Servicios Público de Producción y Desarrollo Económico, de Minería, de Turismo y Cultura y por la Secretaría General de la Gobernación, que tendrá como funciones las de asesorar y asistir al órgano ejecutivo, participando en el proceso de identificación, priorización y selección de los proyectos susceptibles de ser gestionados bajo la modalidad PPP, además de canalizar la asistencia a las jurisdicciones que así lo requieran.

También el proyecto de adhesión propuesto prevé la creación en esa Cámara de Diputados de una Comisión de Seguimiento y

Control de los proyectos gestionados bajo la modalidad PPP, la que tendrá como función la de hacer el seguimiento de los contratos gestionado bajo esta modalidad, verificar el cumplimiento de la ley y sus reglamentaciones, controlar sus resultados y evaluar las perspectivas futuras del sistema al que se adhiere con la ley.

Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, elevo a usted la ley Nacional N° 27.328 y el Proyecto de ley de adhesión a la misma, para su tratamiento.

Atentamente.-